

# BALANCE POLITICO 1994

## INGOBERNABILIDAD

Las pasadas elecciones de 1993 adquirieron una importancia vital para el sistema político. Mediante ellas se clausuraba el quinquenio más accidentado y crítico que hemos tenido en los últimos 34 años de historia, durante el cual el poder ejecutivo perdió su legitimidad y en consecuencia su capacidad de gobierno sobre la vida nacional. El objetivo básico de las pasadas elecciones era reconstituir la legitimidad perdida del poder ejecutivo por medio del sufragio masivo. Lo que a su vez permitiría crear la necesaria base de sustentación para ejercer el poder de gobierno.

En esas elecciones se configuró un cuadro político complejo. En primer lugar, se registró la abstención electoral más alta habida en el país para elección presidencial alguna. Aproximadamente un 40% de los electores inscritos no acudieron a votar. Rafael Caldera obtiene la presidencia de la república sólo con el gesto afirmativo del 18% de los votantes inscritos. La recuperación de la legitimidad para el nuevo presidente se ganaba sólo parcialmente. Por su parte, cinco fuerzas políticas distintas ocupan el Parlamento, imprimiéndose así una dinámica más compleja de funcionamiento dentro de éste y en su relación con el Ejecutivo. En estas circunstancias, el reto mayor del presidente Caldera era aumentar su base de legitimación y crear las condiciones necesarias en el escenario político que le permitieran gobernar efectivamente.

Buena parte de la gestión del presidente Caldera a lo largo del año pasado se dirigió a ganar para sí fortaleza política. En esta línea de acciones se anota en primer lugar el esfuerzo del gobierno nacional para crear las condiciones que ayudaran a superar las tensiones y conflictos dentro de las Fuerzas Armadas. Según el presidente Caldera, el balance de los logros obtenidos en la pacificación y normalización de las Fuerzas Armadas es altamente positivo, tal y como se desprende de su mensaje de fin de año a los venezolanos: «Las Fuerzas Armadas han superado los traumas causados por los acontecimientos de

1992. A través de una conducción prudente y firme se fueron sobreseyendo los procesos, se reincorporaron muchos oficiales y suboficiales a la actividad, se abrieron caminos para que desarrollaran sus propias vocaciones a los pasados a retiro y se han dado a quienes han decidido participar en la vida política todas las garantías que la Constitución y las leyes ofrecen a los ciudadanos».

Si correlacionamos el discurso presidencial con el comportamiento de las Fuerzas Armadas a lo largo del año pasado, hay que concluir que ciertamente se ha logrado normalizar el funcionamiento de la institución castrense en el marco del sistema democrático y se han acallado los «rumores» en la población de posibles golpes y rebeliones militares. Sin embargo, para nadie escapa que apenas se está en los inicios de un proceso de reconstrucción de las Fuerzas Armadas que, además de superar definitivamente los traumas causados por los acontecimientos de 1992, deben ser redefinidas en su concepción y rol dentro del sistema político.

El otro factor de posibles conflictos paralizantes para el Ejecutivo era su relación con el Parlamento y los partidos políticos. En efecto, el presidente Caldera ganó la presidencia apoyándose en una base organizativa recién creada especialmente para ello y sin la fuerza y capacidad de las grandes maquinarias tradicionales como son AD y COPEI. La base parlamentaria del gobierno también resultó muy débil, por lo que necesariamente éste debía buscar alianzas por lo menos con otros dos partidos si quería conseguir apoyo parlamentario. El Ejecutivo optó por afincarse en la alianza Convergencia-Mas, que ya se había construido en las elecciones, e inició la búsqueda de conexiones permanentes con AD y COPEI. AD ha asumido claramente la posición de ayudar al gobierno sin comprometerse institucionalmente bajo la forma de pacto o alianza explícita. De esta manera AD puede mantener su independencia política del gobierno, prestarle el apoyo necesario para fortalecer la estabili-

*En 1994 fuimos testigos de varias respuestas que los actores políticos dieron a tres graves problemas que mantienen en tensión al país: la gobernabilidad perdida del sistema político desde 1992, la crisis de representación profundizada en las elecciones nacionales de 1993 y la incertidumbre de la transición de un modelo de sociedad a otro. Analicemos la evolución de estos problemas.*

**José Virtuoso**

dad política del sistema, darse tiempo así misma para rehacer su organización interna y prepararse para las futuras contiendas electorales. COPEI por su parte sí optó, al menos públicamente, por la oposición, en parte para alcanzar por medio de ello un perfil propio que le permita mejorar su horizonte electoral en el futuro próximo. No obstante en la trilogía Convergencia-MAS-AD el gobierno obtiene la mayoría suficiente en ambas cámaras legislativas para respaldar su gestión.

En términos generales las cinco fuerzas políticas mayoritarias en el Parlamento son conscientes de la fragilidad del sistema político y del riesgo que significa el fracaso del gobierno del presidente Caldera en orden a una posible salida extrainstitucional tipo golpe militar o dictadura civil. Por tanto resulta mucho mejor jugar una política de respaldo en diferentes tonos y matices y de acuerdo a las circunstancias. En caso de hacer oposición, como lo han dictaminado COPEI y LCR, siempre será una oposición moderada que no aumente la dosis de crisis del sistema.

El presidente Caldera también ha sabido aprovechar el desprestigio público del Parlamento para conseguir el respaldo necesario que requiere su gobierno. El Congreso sabe que es percibido por buena parte de la población como la cueva de políticos despilfarradores, culpables de la situación actual. Por ello, los partidos políticos representados en el Congreso prefieren evitar ser convertidos en «chivo expiatorio» en caso de una confrontación con el Ejecutivo. Un momento clave fue la discusión sobre la suspensión de las garantías, en donde el gobierno supo sacar provecho de esta percepción pública para obligar al Congreso a aceptar su decisión.

El otro gran reto en orden a ampliar la base de legitimación del gobierno era aumentar su caudal de apoyo masivo y difuso entre la población. Para ello el presidente Caldera ha puesto todo su empeño en fabricar la imagen de un gobierno popular en contraposición a un gobierno de los ricos y privilegiados y de convertir esa imagen en percepción generalizada. Con ese fin el gobierno ha tratado de calibrar constantemente las expectativas de la opinión pública para responder a ellas con sus acciones y discursos. Las medidas más sobresalientes en esta línea fueron: aumento de salarios por decreto, control de pre-

cios de una parte de los productos de primera necesidad, subsidios a la agricultura y servicios públicos, especialmente el mantenimiento del precio de venta al público de la gasolina, control de cambios y los ofrecimientos de la política social.

Esas acciones han ido respaldadas por un discurso político que insiste en que la causa de la pobreza en Venezuela es la corrupción generalizada y el despilfarro de los inmensos recursos con los que cuenta el Estado. En consecuencia uno de los actores con mayor responsabilidad en la crisis económica y social son los políticos, que han hecho al Estado débil con los ricos y fuerte con los pobres.

El gobierno del pueblo se complementa con la imagen de un gobierno honesto, fuerte, que efectivamente gobierna, que hace frente al hampa y la corrupción. En este orden de ideas y acciones, el gobierno ha criticado públicamente a los banqueros, ha ejercido medidas de fuerza como los controles de precios y de cambio de divisas, ha utilizado la suspensión de garantías constitucionales para intervenir en contra del acaparamiento. La imagen de fuerza del gobierno se ha sustentado sobre todo en el uso cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en operativos policiales para mantener la seguridad y el orden y para proceder a la intervención de la propiedad privada cuando se considera necesario.

La pregunta que queda después de esta reseña es si se ha recuperado la gobernabilidad perdida en el sistema político venezolano desde 1992. Mi respuesta personal es no. El año de 1994 ha sido atravesado por durísimas tensiones ocasionadas por las emergencias producidas en el área económica y social. Ha sido un año en el que se han logrado restablecer precarios equilibrios entre el poder ejecutivo y legislativo, entre las Fuerzas Armadas y los poderes públicos, entre las expectativas de la población y la acción del gobierno y entre los partidos entre sí para fortalecer el sistema. El artífice de todo este equilibrio endeble es el presidente Caldera, cuyo principal logro es la relativa estabilidad conseguida en el país. Logro éste nada desdeñable. Sin embargo pensamos que va contra los hechos calificar a esa estabilidad de paz social y de signo de la recuperación de la gobernabilidad, como lo hizo el mismo presidente en su discurso de fin año. En pri-

mer lugar, porque, como venimos diciendo, los acuerdos conseguidos son muy débiles, pero más radicalmente porque el gobierno nacional no logra estructurar una acción de conjunto que permita dar respuesta a las grandes urgencias nacionales. Los niveles de pobreza siguen creciendo vertiginosamente, la inflación y el desempleo son fuente permanente de inestabilidad y tensión, la violencia campea en todo el país y la tendencia a la anomia y a la disgregación social corroe al país y muy particularmente al Estado.

El gobierno descansa sobre el presidente Caldera, quien se ha convertido en su principal activo político. Pero éste aparece decidiendo y actuando sólo, sin la referencia de su propio equipo ministerial, en ocasiones sin escuchar a sus colaboradores más cercanos. Se percibe también como un gobierno que no busca la coordinación entre el gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Se percibe a un gobierno cuya inspiración y norte de su gestión depende fundamentalmente de su «olfato político» y no del consenso producido al calor y en la tensión del acuerdo colectivo. Todo ello lleva a concluir que el gobierno nacional se ejerce en forma unipersonal, con su respectiva carga de tentación cesarista.

## CRISIS DE REPRESENTACION

El alto porcentaje de abstención en las últimas elecciones nacionales dejó ver claramente una tendencia que cada vez más se agrava en el comportamiento político de los venezolanos, esto es, la apatía política, entendida como la ausencia de resortes motivacionales en el comportamiento colectivo que estimulan la participación activa de los ciudadanos en las decisiones políticas para las que son convocados. En buena parte los responsables de esa crisis son los partidos políticos, quienes han perdido su capacidad de agregar, canalizar y representar los intereses de diversos sectores de la población y, por lo tanto, su potencial movilizador hacia la participación electoral. La salida prevista en esta crisis de representación ha sido el fortalecimiento y desarrollo de la sociedad civil, como alternativa al vacío del liderazgo partidista; sin embargo no se observa un crecimiento significativo en esta línea.

A lo largo de 1994, las organizaciones políticas no han dado muestras de querer reestructurarse internamente en

función de corregir sus desviaciones y recuperar para sí las funciones de representación perdidas. Más bien aparecen enfrascados en sus luchas y rivalidades internas al mismo tiempo que preparan sus maquinarias para la contienda electoral que se avecina hacia finales de este año. En estos tiempos de alta abstención, los partidos han optado por asegurar el voto de sus militantes como medida eficaz para asegurar sus triunfos electorales en medio de una competencia débil y escuálida. En este sentido se han movido AD, COPEI, MAS y CONVERGENCIA. LCR ha seguido otros parámetros de actuación que trataremos de explicar.

AD decidió este año deslindarse de uno de sus máximos líderes, Carlos Andrés Pérez, a quien expulsaron en el último CDN. Junto con él se trata de extinguir la corriente de sus seguidores mediante el recurso de la expulsión, la marginación o el exilio político, como es el caso de Claudio Fermín. La organización aparece ahora nucleada alrededor de la figura de Alfaro Ucero, líder indiscutible que conduce al partido con mano de hierro. Bajo esta guerrilla interna se prepara para las próximas elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y miembros a las asambleas legislativas. Para ello ha decidido escoger a sus militantes no por la vía de las elecciones internas sino por los tradicionales métodos de las preferencias de las dirigencias. Su acción política se ha dirigido a apoyar el gobierno del presidente Caldera como tabla de salvación ante los posibles naufragios del sistema.

COPEI salió fortalecido de sus últimas elecciones internas, en las que se escogieron las nuevas autoridades del partido y se esbozó una línea política de acción: convertirse en un real partido de oposición y en alternativa electoral frente a AD. De esta forma este partido parece estar en camino de superar el trauma de la disgregación interna a raíz de la exclusión de Caldera y de la última derrota electoral, y de construir un perfil electoral propio desde su acción opositora al gobierno.

EL MAS Y CONVERGENCIA siguen brindando la imagen de agrupaciones electorales sin base programática y proyecto nacional que brindar al país. De hecho son la base de apoyo más fuerte de la acción política del gobierno del Presidente Caldera. Los resultados electora-

---

**La pregunta que queda después de esta reseña es si se ha recuperado la gobernabilidad perdida en el sistema político venezolano desde 1992. Mi respuesta personal es no.**

---

les de estas agrupaciones en las próximas elecciones serán claves de interpretación para que el gobierno mida su popularidad y aceptación.

LCR vive un momento difícil. Es blanco de ataques en los sitios donde gobierna, ha descendido su capacidad de encarnar las expectativas de la gente y no ha superado su esquema organizativo original, diseñado para una organización pequeña de oposición. Por otra parte, LCR ha intentado desarrollar acciones de oposición y de movilización a nivel nacional que buscaban acercar este partido a los grandes intereses del país; sin embargo las mismas no han tenido la aceptación que sus organizadores buscaban.

La evaluación del desarrollo de la sociedad civil no arroja saldos positivos. En primer lugar, la agudización de las diferencias sociales ha producido una desintegración de la solidaridad entre las clases sociales y un grave fraccionamiento de las luchas reivindicativas de la sociedad. Quizás donde esa desintegración se observa con mayor preocupación es en lo que ocurre con las percepciones encontradas de la clase media y los pobladores de los barrios en relación a problemas comunes como la violencia, la salud, y las cárceles. La percepción generalizada de la clase media es que los barrios son la fuente de los mayores problemas de las ciudades y que por lo tanto las soluciones pasan por eliminar estos focos problemáticos. Ejemplo claro de lo anterior es el razonamiento hecho en torno a la violencia urbana. Para la clase media, la causa de la inseguridad se ubica en los barrios que son unas guaridas de delincuentes y unas fábricas veloces de producir malandros. La solución es limpiar a las ciudades de esos focos infecciosos para salvar a la gente honesta que vive de su trabajo.

Desde esta ruptura de la solidaridad social el crecimiento de la sociedad civil no puede menos que ser la ampliación de un campo de batalla de distintos sectores

organizados que luchan entre sí por aniquilarse.

En otro orden de ideas, llama también la atención lo que ocurre con la organización del empresariado, por una parte, y de los sectores populares. Un alto porcentaje de las organizaciones civiles del empresariado sigue ejerciendo sus presiones y demandas al Estado por mantener y potenciar el régimen de controles y subsidios en el que se ha desarrollado la actividad económica privada en Venezuela. Aunque el discurso neoliberal se haga presente en muchos de sus voceros, su acción política se vierte sin reparos en el molde de la Venezuela rentista y corrupta tan criticada por ellos mismos. En cuanto a las organizaciones populares, se nota que la lucha por la sobrevivencia cotidiana —en donde el debate es entre la vida y la muerte— se ha convertido en un poderoso disgregador de lo colectivo que favorece la anomia y el individualismo como conducta económica, civil y política.

## **CRISIS DE TRANSICION**

Quizás lo que más profundamente se ha evidenciado a lo largo del año pasado es la profunda crisis de transición de un modelo de sociedad a otro en Venezuela. Ese paso se ha imaginado como el cambio de una sociedad rentista y populista a una sociedad productiva y democrática. Sin embargo no se observa ningún paso decisivo del gobierno nacional en esta dirección. La dirigencia política aparece como distraída en sus sórdidas luchas cotidianas por el poder. El parlamento tampoco legisla en esa dirección. La población sigue apegada a sus convicciones de que somos un país rico, cuyo Estado posee inmensos recursos y cuya obligación es repartirlos. La sociedad civil tampoco aparece comprometida significativamente con los cambios necesarios que hay que dar en esta dirección.

La crisis de transición se tiende a profundizar porque en el fondo de ella nos topamos con una difícil ausencia de Estado. El proyecto rentista populista fue posible porque contaba con un poderoso aparato institucional que sostenía ese proyecto. Hoy aquel modelo está colapsando y junto con él su Estado rector; pero no aparece un nuevo diseño institucional que permita poner en marcha los nuevos sueños y aspiraciones que se esconden bajo la figura de la Venezuela productiva y democrática. ■